

Desde el 4 de mayo de 1954 pasaron por las cárceles paraguayas 360 mil personas, un millón y medio tomó el camino del exilio, el estado de sitio fue decretado 122 veces. Las denuncias sobre detenciones y torturas han dado vuelta al mundo y comprobadas por distintas organizaciones mundiales. Hoy 25 familias extranjeras acaparan 17 millones de hectáreas, la mitad del territorio nacional, mientras 200 mil campesinos carecen de tierras. Stroessner concedió a la empresa norteamericana "Taton Exploration Drilling Company" la concesión exclusiva para la explotación de los recursos minerales de 23 millones de hectáreas.

En el campo económico financiero, pese a la inyección que significó para el régimen en dólares, las obras de construcción de Itaipú, el PIB sufrió una variación negativa de 2,5 por ciento en 1982, según la CEPAL. El déficit comercial del 83 fue de 226 millones de dólares, la deuda externa alcanzó en el mismo año a cuatro mil quinientos millones de dólares mientras la tasa de inflación registraba el 13 por ciento.



—oficialmente— y el desempleo unos nueve.

El hijo de un cervicero alemán con una paraguaya nacido el 3 de noviembre de 1912, además, institucionalizó en todo el país el contrabando indiscriminado que floreció y florece en todo Paraguay. Pero las cosas no quedaron ahí y seguramente pasan también por las jugosas "comisiones" pagadas por criminales nazis como Joseph Mengele quien fue largamente señalado como viviendo en Paraguay en impunidad. Hoy, Stroessner estaría ya con la salud quebrantada y planea entregar el trono a su hijo Gustavo Adolfo... pero como afirma, todo depende del pueblo paraguayo...

Con una superficie de unos 406 752 kilómetros cuadrados, una población de unos tres millones y medio de habitantes, Paraguay es una nación rica, con terrenos fértiles, densos bosques y riquezas como petróleo, uranio y otros minerales. Además, su potencial hidroeléctrico es grande. Un país potencialmente rico; extraordinariamente pobre para los paraguayos.

En su política externa recordemos que el régimen de Stroessner envió a la República Dominicana en 1965 un grupo de 200 soldados; que ofreció tropas para luchar al lado de la brutal agresión imperialista contra el pueblo vietnamita; brindó apoyo logístico para derrocar al Gene-

ral Juan José Torres de Bolivia y al golpe chileno de Pinochet.

Desde 1975 sostiene una relación estrecha con el régimen de Pretoria básicamente en el campo militar, inclusive se ofreció para recibir inmigrantes blancos de la antigua Rhodesia en vísperas de convertirse en Zimbabue. Jefes militares paraguayos han visitado Pretoria y en 1979, el general Magnus Malam fue recibido por Stroessner en un encuentro subrayado por una identificación "en la lucha firme y tenaz contra el comunismo".

Altos dignatarios militares de Estados Unidos, Israel, Taiwán también han visitado a Asunción.

En el preciso momento que vemos avanzar procesos democratizadores en los diversos países del Cono Sur —dice la publicación "Derechos del Hombre de Argentina" de enero último— la dictadura de Stroessner continúa edificando (en estrecha colaboración con el Pentágono) una amplia red de infraestructura militar para facilitar la conspiración, desestabilización y el golpismo en esta parte del continente, sin descartar la posibilidad de transformar al país en "una plataforma de intervención en casos de extrema gravedad" papel ahora cumplido por Honduras en América Central.

En ese cuadro, pese a la represión y a las dificultades organizativas, la oposición se congregó en el "Acuerdo Nacional" integrado por el Partido Demócrata Cristiano, el Liberal Radical Auténtico (desgajamiento del Liberal Radical), el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO) y el partido febrerista que forma parte de la Internacional Socialista.

El Acuerdo Nacional demandó el 4 de mayo la salida de Stroessner del poder, la legitimación de la oposición, su reconocimiento y el inicio del diálogo político con vistas a forjar, para la vida paraguaya, los principios democráticos. El acuerdo ha realizado una defensa a ultranza de la población guaraní —95 por ciento de la población habla y entiende la lengua de aquellos que no pudieron ser doblegados ni ayer, ni hoy, dice— y denuncia la utilización que el régimen realiza de la lengua indígena tras abandonarla como instrumento de defensa de identidad nacional.

El decadente régimen de Stroessner ha organizado cursos de guaraní para inmigrantes coreanos, fugados de Corea del Norte tras la revolución, para que trabajen para la policía convertidos en agentes de seguridad con cobertura de comerciantes.

Una serie de factores parecen conducir, en un futuro cercano al término del régimen de Stroessner, esa larga noche represiva y de corrupción al estilo de Somoza en Nicaragua. Entre ellos la unidad de la oposición y los vientos liberales que soplan en el Cono Sur latinoamericano han recortado el margen de maniobra del régimen y provocado un creciente aislamiento internacional de Stroessner. Su otoño está ahí, al doblar de la esquina. / A. W.

Uruguay

Gobierno rechaza referendo

● Desgarrado entre la ola de democratización argentina y la posición militar brasileña de privilegiar todavía las elecciones presidenciales indirectas, sensibles a los malabares del General Augusto Pinochet para mantenerse en el poder, pero sometido a una formidable presión popular del régimen militar uruguayo del general Gregorio Álvarez navega. En el puesto de mando, sin embargo, el timonel vacila y carece de pulso firme para remontar las olas encrespadas del Plata o para eludir los vientos de tempestad que soplan en el cono sur latinoamericano.

En la secuencia de las manifestaciones populares que estremece la nación oriental, el Partido Nacional (Blanco) del proscrito y requerido líder Wilson Ferreira Aldunate anunció una campaña popular para recolectar un millón de firmas en favor de un referendo capaz de, con su resultado, provocar la suspensión de todas las medidas de excepción todavía vigentes en el país sudamericano. En el primer día de la campaña, según el Partido Nacional, se recogieron 124 mil firmas. "Fue ampliamente satisfactorio el respaldo recibido por la ciudadanía en general y por los «blancos» en particular", dijo el dirigente de la Convención del Partido Blanco, Guillermo García Costa. Las movilizaciones se realizaron de casa en casa, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Según la constitución vigente, de 1967, 220 mil firmas son suficientes para obligar a un Gobierno a convocar un plebiscito.

La decisión del Partido Nacional fue recibida con algunas reservas, por cuestiones tácticas, por parte del habilitado Partido Colorado, mientras el Frente Amplio encabezado por el General Liber Seregni, dejó en libertad a sus militantes para sumarse o no a la iniciativa.



Se mantiene la proscripción política de Liber Seregni.

adoptada poco tiempo después de la llegada de Ferreira Aldunate a Buenos Aires donde reside ahora tras once años de exilio.

El referendo propuesto plantea la rehabilitación política de diez mil ciudadanos, legalización de todos los partidos, amnistía para los detenidos y retira de los militares la potestad de enjuiciar a los civiles por actividades políticas.

La medida, que podría llanar el camino para la redemocratización del país y ofrecer un entorno democrático a las anunciadas consultas del 23 de noviembre próximo fue calificada inmediatamente de "inconducente" por el Ministro de Interior, Julio Rapela. El Ministro negó validez al plebiscito y mantuvo la postura de que sólo un diálogo entre civiles y militares conduciría a una salida de la crisis pero sin mencionar la posible suspensión de los actos dictados por el Gobierno militar y que regirán los señalados comicios.

Un nuevo round en la batalla por la recuperación total de los derechos democráticos uruguayos se ha iniciado. De un lado, la terquedad militar, de otro la concepción de que las fuerzas armadas orientales se mantienen inflexibles en sus objetivos y que por lo tanto sólo la movilización popular es capaz de restablecer el estado de pleno derecho en Uruguay.

La posición militar está consustanciada en dos documentos entregados a los tres partidos habilitados —Nacional, Colorado y Unión Cívica— que fija las reglas para la celebración de los comicios de noviembre y que normarían los destinos del país hasta la elaboración de una nueva Carta Magna por una Asamblea Constituyente que sería electa en el primer trimestre de 1986.

Entre las novedades propuestas por el Gobierno del Teniente General Gregorio Álvarez figuran el funcionamiento de un omnipotente Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) que fungiría de asesor del poder ejecutivo, la conformación del "estado de subversión", la jurisdicción militar sobre delitos políticos, veto a futuras y posibles amnistías y la decisión de, que los ascensos militares son de exclusiva competencia de los institutos castrenses. El Cosena funcionaría así, de hecho, como un Gobierno dentro del Gobierno. Ejemplo: el llamado estado de subversión sería decretado por el Presidente "previo asesoramiento del Cosena". El cuadro culmina con la manutención de la inhabilitación del Frente Amplio, del Partido Comunista y del candidato a la Presidencia Ferreira Aldunate. Desproscritos serían el Partido Demócrata Cristiano, el Socialista y algunas organizaciones que forman parte del Frente Amplio, cristalizado en torno a la figura del General Liber Seregni, quien, a pesar de ello, continuaría inhabilitado como figura política.

Además el Gobierno militar ha acusado al Partido Nacional de querer desestabilizar el país con su iniciativa, afirmación rechazada de plano por la directiva blanca.

Los tres partidos habilitados consideran, sin embargo, las exigencias y disposiciones militares inaceptables aunque esperan una reu-

nión de la Comisión Multipartidaria para discutir con los delegados castrenses desde una posición de consenso.

Los entendimientos deben proseguir, no obstante, en medio de una caldeada atmósfera política derivada de las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del médico Vladimir Roslik, de actos de violencia gubernamental y también por las sucesivas clausuras y requisas en los medios de comunicación masivos orientales. Desde septiembre de 1981, el Gobierno dictó 28 órdenes de cierre, nueve definitivos, de periódicos, revistas y una emisora de radio. Esa situación alcanzó su paroxismo con la suspensión, por tres días, del canal 10, pionero de la TV local por haber difundido un reportaje con Hugo Batalla, dirigente proscrito, cabeza de la lista 99 del Partido Colorado y abogado de Líber Seregni.

La decisión fue calificada por la mayoría de los dirigentes políticos orientales como una medida que promueve el clima de tensión y violencia en el país. "El clima que están creando los militares, conmoviendo y tensando el país, a través de clausuras y actos no aclarados de violencia compromete seriamente la salida pacífica para la crisis", dijo Lorenzo Ríos, otro alto dirigente blanco.

Mientras tanto, el hijo del líder tupamaro Raúl Sendic, detenido en las cárceles uruguayas denunció que el régimen ha aplicado "una política de destrucción física y síquica científicamente orientada" contra su padre y otros presos pero sin lograr sus objetivos.

Raúl Sendic, quien vive en México, arribó a Montevideo el sábado cinco de mayo en compañía de un grupo de parlamentarios brasileños quienes se proponen realizar una campaña para la liberación de detenidos políticos orientales y otros, básicamente los conocidos como "los nueve rehenes", Sendic y otros compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. / AROLDO WALL

Ecuador

Interrogante política

● Calificadas unánimemente como "ejemplares", las elecciones presidenciales del domingo 6 de mayo en el Ecuador tuvieron un resultado para muchos sorprendente, y que abre una gran interrogante acerca del futuro político de este país de 8,9 millones de habitantes.

El fruto de León Febres Cordero, Ingeniero mecánico de 53 años, militante del Partido Social Cristiano y representante derechista "Frente de Reconstrucción Nacional", no era esperado. La victoria en la primera vuelta del socialdemócrata Rodrigo Borja por 35 mil votos y el supuestamente importante caudal de sufragios que debía derivar en su favor de otros partidos de centroizquierda, auguraban un futuro.

Algo no funcionó y las causas están siendo discutidas y analizadas

en diversas estructuras políticas, mientras que Febres Cordero descansa y espera que el tribunal supremo electoral —que inició los escrutinios oficiales el pasado martes— lo proclame presidente electo.

No es una tarea fácil la que deberá asumir desde el momento mismo en que el 10 de agosto próximo sea proclamado el septuagésimo quinto presidente del Ecuador.

Sus pródigas promesas electorales, sintetizadas en el lema "pan techo y empleo", se enfrentarán con la aguda crisis económica que afecta al país y que lo obligará, apenas asumido el gobierno, a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El objetivo básico será suscribir un nuevo convenio "stand by" que le permita renegociar compromisos por 600 millones de dólares que vencen este año y obtener un crédito por 400 millones para solventar el déficit de la balanza de pagos.

En sus primeras declaraciones como virtual presidente electo, Febres Cordero dijo que respetará al FMI y que tratará de negociar en las mejores condiciones posibles para el país, pero advirtió que "no tomará ninguna medida que afecte al bienestar del pueblo ecuatoriano". Reiterados también han sido sus anuncios de que no devaluará la moneda.

Aunque se autodefine como partidario de la teoría económica social de mercado, aplicada con magros resultados por las dictaduras del Cono Sur, Febres Cordero ha prometido trabajar para la inmensa mayoría de marginados del país.

Aumentaré los sueldos tantas veces como sea necesario, dijo, para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, y aseguró que creará —mediante el incremento progresivo de la producción— empleos para alrededor del 55 por ciento de la población económicamente activa que se encuentra desempleada o subempleada.

Para esas y otras difíciles tareas, Febres Cordero espera contar con el respaldo de un Parlamento que, sin embargo, estará constituido mayoritariamente por opositores de centroizquierda.

El hambre, la miseria y la marginación no tienen color político, afirmó al expresar su seguridad en que el Parlamento unicameral respaldará iniciativas de carácter social.

El sector empresarial, al que se encuentra íntimamente vinculado y que respaldó monetariamente su costosa propaganda electoral, ha expresado su satisfacción por el triunfo de Febres Cordero (un empresario de larga y exitosa trayectoria) y asegurado que la confianza y con ella las inversiones extranjeras, retornará al país.

Febres Cordero se ha declarado partidario de la inversión extranjera y anunció que planteará reformas al Pacto Andino de Integración para permitir el acceso de esta bajo mejores condiciones.

En el plano internacional, señaló que pretende mantener las mejores relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, aunque advirtió que seguirá una política de "herida abierta" en el referendo

límitrofe que mantienen Perú y Ecuador desde hace cuatro décadas.

Pese a considerar la participación ecuatoriana en la Organización de Países Exportadores de Petróleo como un mal "irremediable", dijo mantendrá las mejores relaciones con los integrantes de la OPEP organización a la cual deberá probablemente acudir para mantener los deteriorados precios del crudo ecuatoriano, que representa más del 65% de las exportaciones del país.

El triunfo de León Febres Cordero está prácticamente asegurado, así como su asunción a la presidencia de la República el 10 de agosto próximo. De eso no cabe duda.

Los integrantes surgen respecto a sus promesas electorales y sus posibilidades reales de cumplirlas: 30 000 viviendas por año con bajas cuotas mensuales y sin entradas, jubilación para la mujer a los 55 años, trabajo estable para más de un millón y medio de ecuatorianos desempleados o subempleados.

Pero quizás la duda mayor consista en cómo conciliará sus tesis neoliberales con sus proclamadas intenciones de favorecer a los marginados, una inmensa mayoría de los habitantes urbanos y rurales del país. / OMAR SEPULVEDA, de Prensa Latina

OUA

Otra larga marcha hacia la cumbre

● Como se esperaba, el nuevo gobierno de Conakry admitió finalmente la falta de condiciones en su país para servir como sede de la vigésima cumbre de la Organización para la Unidad Africana (OUA). El nuevo primer ministro guineano, Diara Traoré, confirmó al término de una extensa gira continental que la próxima reunión de Jefes de Estado y de Gobierno se realizará en Addis Ababa en una fecha aún no determinada. Algunos observadores han señalado que esa fecha pudiera estar enmarcada dentro del mes de noviembre próximo, presumiendo que ya para esa altura del año podría haber algún avance en las negociaciones para resolver la situación en el escindido Chad y en aquellas otras que se efectúan para concluir el proceso de descolonización del Sahara Occidental. Estos dos problemas, ciertamente, son los que han centralizado los debates y las mayores dificultades de los últimos años en el seno de la OUA y los que, en buena medida, han sido manipulados como "caballos de Troya" por Estados Unidos y Marruecos para estimular una ofensiva divisionista tendente a paralizar los trabajos de la organización que agrupa a todos los Estados africanos con excepción de Sudáfrica, bastión del apartheid.

En el pórtico de su periplo, el jefe de gobierno guineano se mostró optimista en cuanto al mantenimiento de Conakry como sede del cónclave, en cumplimiento de lo

acordado en la XIX Cumbre de la OUA. Los militares que asumieron el poder apenas una semana después del fallecimiento del presidente Sekou Touré habían planteado únicamente la necesidad de posponer el encuentro. Pocas semanas después confesaron que —en realidad— no era conveniente para ellos enfrascarse en complejas y dilatas gestiones diplomáticas a nivel de la organización panafricana.

Los observadores acordaron que la anterior sede de la cumbre (Libia) tuvo que ser sustituida igualmente por la sede permanente de la OUA —que es Etiopía—, como una salida a la evitación de extender una coyuntural paralización de los trabajos que debían ser acometidos por los gobernantes africanos en los órdenes financiero y político, principalmente. Ni qué decir hay que los problemas políticos más candentes fueron también en aquella ocasión los del Sahara Occidental y Chad.

El presidente guineano, coronel Lansana Conte, se había mostrado partidario también, a raíz del golpe militar a fines de marzo, de mantener a Conakry como sede del cónclave panafricano, pero después coincidió con sus compañeros de equipo en que era necesario priorizar el funcionamiento de las instituciones locales, al mismo tiempo que indicó que había que trabajar en reformas estructurales dentro del país. Se refirió entonces a la "gran penuria de divisas extranjeras dejada por el anterior régimen, que afecta considerablemente la recuperación económica" y a la aplicación inmediata de una política "para fomentar la inversión extranjera".

En este contexto no podía sorprender el anuncio de las nuevas autoridades de Conakry en el sentido de no recargar su agenda con la compleja problemática que desde hace algún tiempo presenta la OUA. A nadie debe extrañar tampoco que los enemigos de la unidad en África vuelvan a la carga y reanimen su política de chantaje. En algunos medios diplomáticos del continente se comienza a enarbolar como pretexto para tratar de crear dificultades a la reunión en la capital etíope, la decisión de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) de participar en lo adelante en todas las conferencias y reuniones de la organización panafricana.

Recientemente, en entrevista concedida a la agencia argelina "APS", el presidente del Consejo Nacional Revolucionario de Alto Volta, Thomas Sankara, dijo respecto de la futura cita de los gobernantes africanos que "la fecha poco importa" "en comparación con todo lo que hay que hacer". Aludiendo a las reiteradas negativas de Marruecos a aceptar la aplicación de la Resolución de la XIX Cumbre de la OUA sobre el Sahara Occidental —que prevé la realización de negociaciones con los saharauíes y de un referéndum sobre la autodeterminación de ese pueblo árabe—, el líder voltaico dijo que todos los países del continente "deben ayudar a Marruecos a vivir con una realidad que ya nadie puede negar". Sankara subrayó que es preciso contar con una OUA "más sana, más vigorosa y más dinámica". / JUAN SANCHEZ